

DOCTOR JOSE RAFAEL SERRES

**La legislación de policía sanitaria  
de los animales en el 70 aniversario  
de la ley No. 3959**

SESION DEL 14 DE OCTUBRE DE 1970

Para la protección sanitaria oficial de la ganadería -con importante y eficaz repercusión sobre la Salud Pública— la República Argentina cuenta, como se sabe, con una ley fundamental: es la denominada “Ley de policía sanitaria animal, o “de los animales”, cuyo número es 3959, y que fue promulgada el 10 de octubre de 1900, siendo presidente de la Nación el general Julio A. Roca, y ministro de .Agricultura el doctor Martín García Merou.

Según el artículo 1". la sanción de esa ley fue para "la defensa de los ganados en el territorio de la República, contra la invasión de enfermedades contagiosas exóticas, y la acción contra las epizootias ya existentes en el país", todo lo cual se expone en treinta y seis artículos.

Dispone la ley que dicha defensa debe hacerla efectiva el Poder Ejecutivo en la capital de la República, territorios nacionales y lugares sujetos a la jurisdicción exclusiva del Gobierno Nacional, v también en lo pertinente al tráfico o comercio de ganado entre una provincia con otra o cualesquiera de los lugares sujetos a la jurisdicción mencionada.

Asimismo, se fija esa actuación en todos los casos en que los gobiernos de provincia soliciten su acción dentro de los límites de su respectiva jurisdicción, o en que se trate de enfermedades contagiosas extendidas a más de una

provincia, o que reveladas en una sola, asuman carácter epizootico y ofrezcan el paligro de propagarse fuera de ella.

La ley dispone también que los gobernadores de provincia, como agentes naturales del Gobierno Nacional, deberán contribuir, dentro de los límites de su respectivo territorio, a los propósitos de esta ley. No obstante, el Poder Ejecutivo podría valerse de su personal propio, revistiéndolo de toda la autoridad necesaria para la realización de sus fines, cuando las circunstancias lo requiriesen.

Poco tiempo después, mediante la ley N° 4155, promulgada el 27 de diciembre de 1902 y frente a exigencias exteriores, fueron modificados los artículos 10 y 16 de la ley N° 3959.

En efecto, mediante ese nuevo *art. 10* se preveía especialmente “la inspección sanitaria de los mercados de ganado, tablada, ferias, mataderos, frigoríficos, saladeros y, en general, de todos los establecimientos donde se elaboren productos de origen animal”, especificando la jurisdicción correspondiente.

En cuanto al “exterior”, se amplió la prohibición de importación a que se refería el *art. 16* acerca del desembarque de animales en general o de especies determinadas, así como de sus cadáveres, forrajes, camas, estiércol u objetos peligrosos “procedentes de cualquier nación o de una parte cualquiera de ella, donde exista cualquier enfermedad que pueda constituir una amenaza para la ganadería nacional”.

Se extendió también dicha prohibición a las procedencias de países donde las leyes y disposiciones reglamentando la importación y exportación de animales y previniendo la introducción o propagación de enfermedades, así como la administración de los respectivos reglamentos y demás circunstancias del caso “no ofrezcan garantía suficiente a juicio del Poder Ejecutivo, contra la introducción del contagio”.

Las modificaciones dispuestas mediante la ley N- 4155 fueron incorporadas al texto de la ley N° 3959, por el decreto del 17 de enero de 1903.

Esta legislación suministró la base legal para la organización de los servicios oficiales nacionales de policía sanitaria veterinaria que se necesitaban, y que tan grandes beneficios han prestado y prestan a la economía y a la salud pública de la Nación.

\* \* \*

Como la ley N° 3959, no obstante la designación de “Policía Sanitaria de los Animales”, según el art. 1° sólo se refiere a los “ganados” y no a todos los animales, las disposiciones de esa ley fundamental han sido extendidas mediante el decreto N° 27342, del 10 de octubre de 1944. Este decreto fue ratificado por el Congreso Nacional mediante la ley N° 12979, en el año 1947.

Desde entonces las disposiciones de la ley 3959 tienen aplicación a “*todas* las especies animales afectadas por las enfermedades que el Poder Ejecutivo de la Nación, al reglamentarla, incluya en la nomenclatura a que se refiere el art. 3° de la misma, y sobre las cuales ha de recaer su acción, pudiendo variarla cuando lo estime conveniente”.

\* \* \*

Veamos, ahora, cómo se llegó a la legislación de 1900.

Es necesario que se sepa que fue muy largo el proceso que epilogó en la sanción de la ley N° 3959, de año 1900.

Ha transcurrido mucho tiempo, indudablemente, desde que en época de la Colonia, para combatir las mortandades de animales se acudía a la celebración de novenarios, con procesión del patrono San Martín, y a las limosnas, y se suplicaba a los curas y a los prelados de los conventos que auxiliasen con sus sufragios a la población, como lo resolvió el Cabildo del 24 de marzo de 1609, en la ciudad de la Trinidad Puerto de Santa María de Buenos Aires.

En las Actas del extinguido Cabildo de Buenos Aires, consta también el establecimiento, en esta ciudad, del primer Albeitar. La correspondiente licencia para curar le fue

acordada a Juan Cordero Margallo, a su solicitud, en el Cabildo del día 13 de abril de 1609.

A pesar de todo, debemos llegar a la segunda mitad del siglo XIX para encontrar las primeras preocupaciones serias en materia de lucha contra las epizootias, y principalmente contra la sarna ovina, entonces.

Se debe reconocer que en materia de sanidad ganadera, han sido las provincias quienes tomaron la iniciativa, pues en diversos códigos rurales anteriores a la ley nacional N° 3959, existen disposiciones que muestran la preocupación que al respecto mereció de las legislaturas provinciales.

El año 1865 marca una fecha que corresponde destacar pues el 6 de noviembre de ese año es la de la promulgación —por el gobernador Mariano Saavedra— de la ley del 31 de octubre de dicho año, que sancionó en la provincia de Buenos Aires, el primer Código rural argentino.

Después de la organización nacional fue esa la primera manifestación legislativa vinculada con la materia, y de la que la Academia se ocupó especialmente, en 1965. al cumplirse el Centenario de ese cuerpo jurídico, y como homenaje a su benemérito autor. Doctor Valentín Alsina.

En el Título III. sobre disposiciones comunes a ganadería y labranza, está comprendida la sección IX, sobre Epizootias o Enfermedades Contagiosas, arts. 280 a 282, que señalan la primera preocupación gubernativa en favor de la lucha contra las enfermedades contagiosas de los ganados.

Comprendía tres medidas obligatorias fundamentales: la comunicación o denuncia, el aislamiento de los enfermos o sospechosos, y la destrucción (enterramiento\* de los cadáveres.

Preveía también la consulta del Gobierno a "□ veterinarios" o a "peritos", y aun su envío al lugar del hecho, para dictar después, "con arreglo a sus informes o consejos, las

medidas que se estimen para cortar y extirpar el mal”, así como la redacción de instrucciones adecuadas, que “será del estricto deber de la autoridad local observar”.

Esto no era sino la aplicación, por la provincia de Buenos Aires, de las facultades inherentes al “poder de policía”.

El ejemplo de Buenos Aires fue seguido por otras provincias al sancionar sus códigos rurales con anterioridad a la ley N° 3959 del año 1900.

Así lo hicieron: Catamarca (8 enero 1878), Mendoza (12 mayo 1880), Córdoba (4 noviembre 1885), San Luis (1888), Entre Ríos (22 noviembre 1892), Tucumán (19 marzo 1897) y Santiago del Estero (31 diciembre 1897).

El Congreso Nacional, por su parte, sancionó el Código Rural de los Territorios Nacionales, el 14 de agosto de 1894, mediante la ley N° 3088.

#### DE LA LEGISLACION NACIONAL ANTERIOR

En 1895, el 17 de abril, se dictó un decreto sobre “exportación”, con las firmas del presidente J. E. Uriburu y su ministro J. J. Romero, corrigiendo deficiencias de otro anterior. Se refería a las condiciones que debían cumplir los buques en cuanto a las instalaciones y cuidado de los animales, así como a los embarcaderos de ganados y a la inspección veterinaria de estos en los puertos de embarque.

Este decreto fue dictado acertadamente, teniendo en cuenta lo siguiente: “que es deber del Gobierno, a ejemplo de lo que han hecho otras naciones adelantadas, adoptar todas las medidas que estén en sus facultades, conciliando los intereses del país, para que esta exportación no se interrumpa por falta de previsión de los que la fomentan; y, por el contrario, se desarrolle en una progresión acelerada sin perjuicio de las verdaderas conveniencias del país”.

Se disponía también que el respectivo “reglamento” fuese traducido al inglés y al francés, y repartido profusamente.

Este decreto fue dictado sobre la base del proyecto y presentado al Departamento Nacional de Higiene por el vocal entonces de esta entidad, médico veterinario doctor Angel C. Martínez, de la primera promoción del Instituto Agronómico Veterinario de Santa Catalina, en la provincia de Buenos Aires, donde se iniciaron los históricos cursos del “6 de agosto de 1883”, durante el Gobierno del doctor Dardo Rocha.

Posteriormente, y de acuerdo con la experiencia resultante de la aplicación del decreto de 1895, éste fue sustituido por el dictado el 11 de abril de 1898. El nuevo decreto se refería especialmente a la importación y a la exportación, y para ello se tuvo en cuenta —como lo expresaba en su texto— un “proyecto de policía sanitaria animal pendiente de la consideración del honorable Congreso”.

Se declaraban únicos puertos habilitados para la importación de toda especie de ganados, los de Buenos Aires, La Plata y Rosario, y contenía disposiciones sanitarias muy minuciosas; igualmente respecto de la exportación.

Un año después, con el propósito de perfeccionar las disposiciones sobre la materia, el presidente de la Nación, general Julio A. Roca dictó el decreto del 22 de mayo de 1899, refrendado por el ministro de Agricultura Dr. Emilio Frers, primer titular de ese departamento de Estado, cuya creación se debió a la reforma de la Constitución Nacional del año 1898.

Se declaraba el de Buenos Aires como único puerto habilitado para la importación de ganado, y con la prohibición de introducir animales afectados de enfermedades contagiosas, o provenientes de países donde reinaban éstas, detallando su nómina, y la conducta a seguir en el

caso de comprobarse su existencia a raíz del examen veterinario realizado a bordo o en tierra.

También era minuciosa la especificación de los requisitos para la exportación de ganados, su sanidad y la obligación del baño antiséptico de los lanares, previo al embarque.

Asimismo se disponía la obligación de limpiar y desinfectar —a costa de sus dueños— todo vehículo empleado para el transporte de ganados destinados a la exportación.

Pero, no obstante su amplitud e importancia, tampoco nada contenían esos decretos que se refiriese a la policía sanitaria veterinaria interna, a la zooprofilaxis.

En ese mismo año —1899— felizmente el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley sobre la materia, conteniendo excelentes disposiciones, aunque era más bien “un proyecto de ley sobre transporte de animales en pie”, y sólo como accesorio se ocupaba de policía sanitaria general, como se comentó entonces.

La iniciativa —del primer ministro de Agricultura Dr. Emilio Frers— no tuvo, sin embargo, la acogida que merecía, pues no se estaba todavía bajo la presión de circunstancias que, poco después, precipitaron los acontecimientos legislativos.

\* \* \*

#### INICIATIVA DE EZEQUIEL RAMOS MEXIA

A raíz de la aparición de la fiebre aftosa, en los rodeos del país, suceso que tuvo la grave consecuencia de determinar la clausura de los mercados extranjeros para nuestro ganado en pie, el diputado nacional Sr. Ezequiel Ramos Mexía presentó a la Cámara de que formaba parte, el 9 de mayo de 1900, un “Proyecto de la ley de policía sanitaria animal”, que no era otra cosa —según lo expresó el autor



al fundarlo— “que la adaptación a nuestras costumbres, a nuestras prácticas, a nuestras instituciones, de todo lo que sobre la materia se ha discutido, se ha enseñado, se ha comprobado como ventajoso y se ha votado por todos o casi todos los parlamentos de las naciones civilizadas del mundo”.

Era este el primer esfuerzo oficial serio, del Gobierno Nacional, para dotar al país de los resortes legales que permitieran organizar la lucha científica, metódica, contra las plagas de la ganadería.

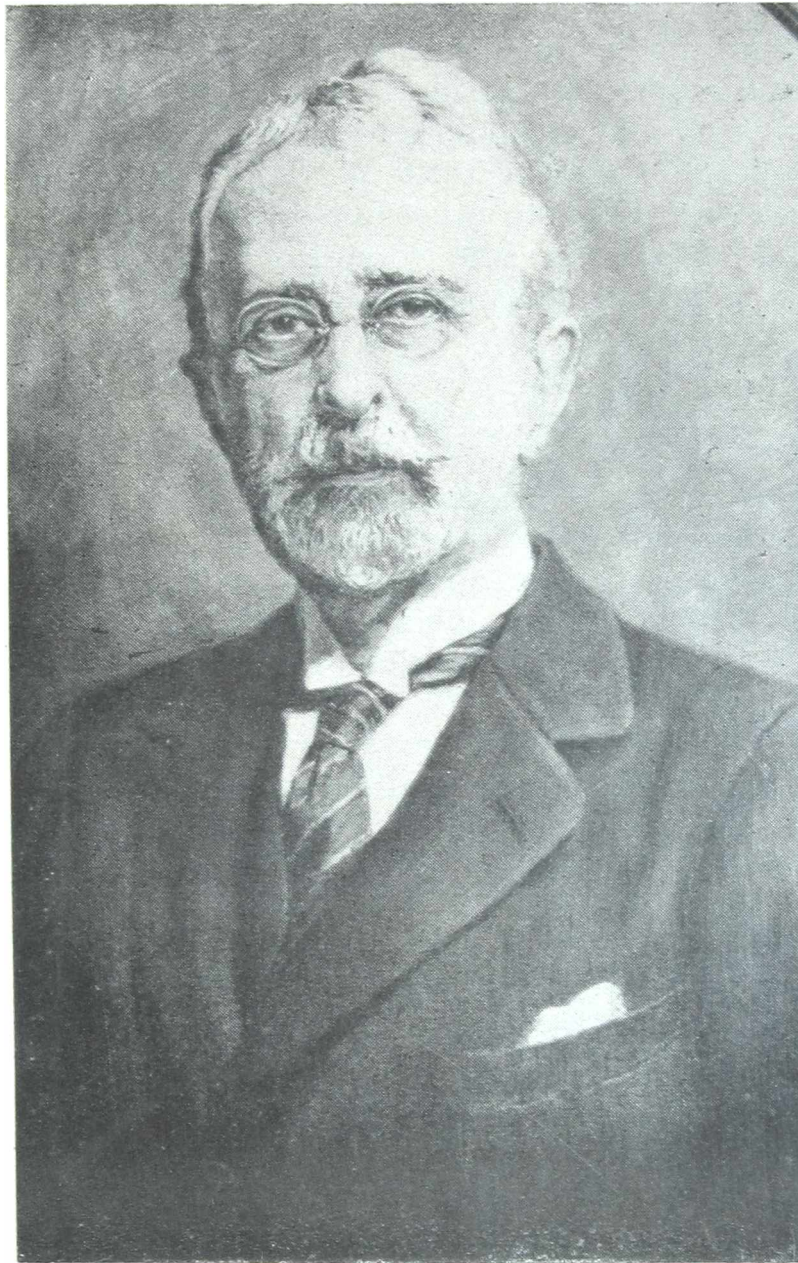
Hasta entonces, como se ha visto, el Poder Ejecutivo Nacional sólo se había preocupado de dar reglamentos cuya constitucionalidad se discutía, acerca de la importación y de la exportación de ganado en pie, inclusive las disposiciones sobre el transporte de animales vivos, contenidas en el Reglamento General de Ferrocarriles, del año 1894. Pero esos reglamentos no alcanzaban a llenar el vacío que al respecto existía en nuestra legislación sanitaria veterinaria.

La Cámara destinó el proyecto a su comisión de Agricultura, integrada por los Sres. Antonio Bermejo, Benito Carrasco, Sabá H. Hernández y Ezequiel Ramos Mexía, la que se expidió adoptando el proyecto de este último, con sólo modificaciones de detalle.

En la sesión del 25 de junio de ese año (1900) la Cámara inició su consideración y la continuó durante otras diez, lo cual demuestra la trascendental importancia que se había asignado a la materia.

Tuvieron actuación descollante en los debates, entre otros legisladores —v cuyos nombres merecen ser recordados— Manuel Quintana, Antonio Bermejo, Rufino Yarela Ortiz, Pedro Lacavera, Alberto Soldati, Tomás R. Cullen, y el propio Ramos Mexía.

No es de extrañar, por lo tanto, que el proyecto sólo alcanzara a ser sancionado por la Cámara después de ha-



EZEQUIEL RAMOS MEXIA

15 diciembre 1853 - 7 noviembre 1935

ber introducido modificaciones y supresiones de alguna consideración.

Pero, como lo había declarado el autor del proyecto y miembro informante de la Comisión, con indiscutible elevación de miras, lo que se necesitaba con urgencia era “una ley”, expresándolo con estas palabras: “Lo que creo es absolutamente indispensable, lo que creo más esencial, es que el Congreso se ocupe de esta cuestión de cualquier modo que sea. Con este proyecto, con cualquier otro, es necesario que se dicte una ley”.

\* \* \*

La Cámara de Diputados aceptó —en la sesión del 5 de octubre— las enmiendas que el Senado introdujo en su sanción, atento sobre todo a la razón de urgencia, una vez que hubo escuchado también éstas y otras sensatas palabras de Ramos Mexía.

“Después de las once o doce sesiones que la Cámara dedicó al proyecto de ley de policía sanitaria, me parece que me agradecerá que sea breve en el informe que voy a hacer. El Honorable Senado ha introducido una serie de modificaciones que no afectan, en nada, al fondo de la ley, modificaciones de pura forma, que la Comisión de Agricultura ha creído conveniente aceptar porque todas ellas concurren a mejorarla considerablemente.

“Esta declaración que hace el autor del proyecto, debe mostrar a la Cámara que debe ser cierta su afirmación, desde que para ello necesitaba hacer un pequeño sacrificio de amor propio”.

Ramos Mexía propuso enseguida que la Cámara votase las modificaciones en globo, y así se hizo, con lo cual quedó terminado el asunto.

Como he dicho, el general Roca, presidente de la Nación, promulgó la ley el 10 de octubre de 1900, con el número 3959, cuyo texto va en el apéndice.

Acaba, pues, de cumplir setenta años, desde su sanción.

\* \* \*

#### ACTUALIZACION DE LA LEY N° 3959

Si bien la aplicación de la legislación sanitaria de los animales, en vigor, ha sido eficaz hasta el presente, puede serlo más todavía, para el cumplimiento de su trascendental finalidad, si recibe algunos agregados y enmiendas que la actualicen.

Para alcanzar el efecto deseado sería conveniente proceder a su revisión, con intervención de las partes interesadas: el Estado y las entidades representativas de las ciencias veterinarias y de productores rurales.

Desde ya van, a continuación, algunas recomendaciones. Por de pronto deben ser prohibidas, mediante ley las transacciones sobre animales con enfermedades contagiosas, colocando a esos animales “fuera del comercio”, con el alcance jurídico de “nulidad” de los respectivos contratos.

La única salvedad aceptable sería la del destino “a matadero”, de conformidad con las disposiciones reglamentarias que dicte el Poder Ejecutivo.

\*

#### Importaciones peligrosas

Toda cepa viva y demás productos biológicos destinados a investigaciones o experimentaciones acerca de problemas de patología animal, que se pretenda importar, debieran ser sometidas previamente a la fiscalización veterinaria oficial.

Igual medida debe adoptarse respecto de animales inoculados experimentalmente, o con infección o infestación natural.

Corresponde, también, la prohibición de introducir al país cepas activas de enfermedades exóticas, salvo necesidad inmediata y bajo fiscalización veterinaria oficial.

Igual medida respecto de vacunas destinadas a ese mismo tipo de enfermedades.

Y también la fiscalización veterinaria oficial de subproductos animales, huevos para incubar, semen congelado, y también de todo producto de origen animal, o productos o elementos sospechosos de contaminación por agentes de enfermedades exóticas, que se pretenda introducir en el país.

\* \* \*

#### A PROPOSITO DE LAS PENALIDADES

Además como el monto de las multas aplicables para la represión de las infracciones a las disposiciones sanitarias legales, fijado en el año 1900 —entre cien pesos % y mil pesos, como mínimo y máximo respectivamente— no estaban de acuerdo con el valor monetario en los años transcurridos, al cabo de más de medio siglo dicho monto fue elevado considerablemente —como puede verse en el apéndice— mediante las leyes *Nº 15021*, del año 1959, y *Nº 15945* del año 1961, y sobre todo mediante un *decreto ley Nº 6134* del 25 de julio del año 1963, creador del denominado Servicio de Luchas Sanitarias (SELSA) en la Dirección General de Sanidad Animal, de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación.

Según este último acto gubernativo el monto mínimo y máximo de las multas aplicables fue fijado en *un mil y un millón* de pesos moneda nacional, respectivamente.

Nuevas penalidades todavía fueron sancionadas a principios de 1967, mediante la *ley N- 17160*, del 2 de febrero de ese año, ley que dispuso una nueva reforma del art. 10 de la ley 3959, al modificar ampliamente las normas de habilitación de establecimientos que reciben, producen o elaboran productos de origen animal, y de la fiscalización higiénico-sanitaria de carnes, aves, huevos y pescados.

La violación de dichas normas y de las reglamentaciones dictadas en su consecuencia son penadas con *multas* graduables desde \$ 10.000 % hasta \$ 10.000.000 pudiendo disponerse la suspensión o retiro de la habilitación. Mayor información al respecto se encontrará en el Apéndice.

\*

#### EL ARTICULO 206

#### DEL CODIGO PENAL

Asimismo, a raíz de las reformas introducidas en el Código Penal por la ley N° 17567, sancionada y promulgada el 6 de diciembre de 1967 —y en vigor desde el 1° de abril de 1968— como ya lo he expuesto ampliamente en la sesión del 17 de abril de 1968— al considerar los “delitos contra la salud pública”, se dispone, mediante el art. 206, que “será reprimido con *prisión de uno a seis meses*, o con multa de diez mil a cien mil pesos el que violare las medidas impuestas por la ley o por la autoridad para impedir la introducción o propagación de una epizootia o de una plaga vegetal”.

La redacción actual del mencionado art. 206, a consecuencia de aquella ley, importa por lo tanto, extender la represión de violaciones al caso de “plaga vegetal”, represión que anteriormente estaba limitada a “las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal”, y

que —como he dicho— se reprimía mediante prisión de uno a seis meses.

Así, pues, dichas violaciones son consideradas como “delitos” y no simplemente como faltas o contravenciones.

\*

El examen de la jurisprudencia existente sobre esta materia revela que se ha venido produciendo grave discrepancia en los diferentes tribunales judiciales que han intervenido en la consideración de casos, discrepancia respecto de la calificación legal que correspondía a la infracción cometida, para la disposición represiva que se debía aplicar.

Así, algunos tribunales federales han entendido que c-1 Código Penal había modificado el régimen legal de la defensa sanitaria de los animales, *derogando* todas las sanciones contenidas en la ley N° 3959, convirtiendo en delitos las violaciones a la misma, sin excepción, no limitando esa calificación sólo a los casos —como correspondía— en que las violaciones fuesen capaces de comprometer la salud pública.

Sin embargo, las infracciones respecto de las epizootias no transmisibles a la especie humana, e incapaces, por lo tanto, de comprometer la salud pública, *deben estar fuera del Código Penal*, aplicándoseles las penalidades previstas en la ley especial N° 3959 y sus modificaciones legales, que ya he mencionado y que las han elevado justificadamente.

Además, si a las violaciones de las disposiciones sobre policía sanitaria de los animales comúnmente juzgadas —como es el caso de la aparición de alguna enfermedad contagiosa en los ganados de los establecimientos rurales, sobre todo existiendo falta de denuncia oportuna, o tránsito de animales enfermos, o falta de destrucción de elementos contagiosos, etc., les fuesen aplicadas las sanciones

previstas por el mencionado art. 206 del Código Penal— que prevé la comisión de un delito doloso —el resultado práctico sería, lamentablemente, el de dejar sin represión la mayoría de las infracciones previstas por la legislación sanitaria de los animales, por cuanto la experiencia demuestra que casi todos los casos sólo son atribuibles a negligencia, a falta de vigilancia, y no a la voluntad específica de violar la ley.

Así pues, la aplicación estricta del Código Penal a la materia no sólo no facilitaría la defensa sanitaria necesaria y deseada, sino que la complicaría y dificultaría seriamente como es la realidad.

Este concepto se hace extensivo ahora, como he dicho, a todo lo que se relaciona con la defensa de la sanidad agrícola.

Lo que corresponde —^v se debe hacer cuanto antes— es restablecer la plena vigencia al respecto, de la ley número 3959 y sus complementarias, limitando la aplicación del Código Penal a las violaciones dolosas que resultaren atentatorias contra la salud pública, vale decir que lo que corresponde es precisar el alcance del art. 206. en concordancia con lo expuesto.

Una tentativa de reacción favorable en esta materia ocurrió en 1940, al ser enviado al Congreso Nacional —el 20 de enero— un proyecto de ley, durante la presidencia del doctor Roberto M. Ortiz.

Según dicho proyecto —que no fue sancionado— eran declarados en vigor los artículos 29 a 33, sobre penalidades, de la ley N° 3959, y se derogaba el art. 206 del Código Penal.

Evidentemente, la proyectada derogación era bien intencionada, pero excesiva, pues lo que se debía proponer, —y debe hacerse, como he dicho, y sin demora—, es precisar el alcance del art. 206, en concordancia con lo expuesto y actualizar la ley 3959.



## A P E N D I C E

- I. — Policía Sanitaria Animal - Texto de la ley N° 3959, de 1900.
- II. — De las leyes N° 15021 (1959) y N° 15945 (1961'), y del decreto-ley N° 6134 (1963').
- III. — De la ley N° 17160 (1967'» reformadora del art. 10 de la ley N° 3959.
- IV. — Carnes. Leyes N° 18811 y N° 18819 sobre “Régimen de habilitación y funcionamiento para establecimientos afectados a faena, comercialización y depósito”; y sobre “Procedimientos para el sacrificio de animales”.

### I

LEY N° 3959. DEL 10 DE OCTUBRE DE 1900

POLICIA SANITARIA ANIMAL

\*

PUBLICACION OFICIAL DE LA

SECRETARIA DEL HONORABLE SENADO DE LA NACION

AÑO 1898 a 1900

\*   \*   \*

Buenos Aires - 1907

Artículo 1° — La defensa de los ganados en el territorio de la República contra la invasión de enfermedades contagiosas exóticas

y la acción de las epizootias ya existentes en el país, se hará efectiva por el Poder Ejecutivo por los medios que esta ley indica.

- 1 . En la Capital de la República, territorios nacionales y lugares sujetos a la jurisdicción exclusiva del Gobierno Nacional.
2. En lo relativo a las operaciones de importación y exportación de ganado del extranjero o para el extranjero.
3. En lo pertinente al tráfico y comercio de ganados entre una provincia con otra o cualquiera de los lugares mencionados en el inciso primero.
4. En todos los casos en que los gobiernos de provincias soliciten su acción dentro de los límites de su respectiva jurisdicción. o en que se trate de enfermedades contagiosas extendidas a más de una provincia o que. aunque reveladas en una sola, asuman carácter epizootico y ofrezcan el peligro de propagarse fuera de ella.

Art. 2º — Los Gobernadores de Provincias, como agentes naturales del Gobierno Nacional, deberán contribuir, dentro de los límites de sus respectivos territorios, a los propósitos de esta ley.

El Poder Ejecutivo podrá, no obstante, valerse de su personal propio, revistiéndolo de toda la autoridad necesaria para la realización de sus fines, cuando las circunstancias lo requieran.

Art. 3º — El Poder Ejecutivo al reglamentar esta ley. hará la nomenclatura de las enfermedades a que se refiere el artículo primero, y sobre las cuales ha de recaer su acción, pudiendo variarla cuando lo estime conveniente.

Art. 4º — Todo propietario o persona que de cualquier manera tenga a su cargo el cuidado o asistencia de animales atacados por enfermedades contagiosas o sospechosos de tenerlas, está obligado a hacer inmediatamente la declaración del hecho a la autoridad local que los reglamentos sanitarios determinen.

Art. 5º — Sin perjuicio de esta declaración y aún antes de que las autoridades hayan intervenido, desde el momento en que el pro'

pietario o su encargado hayan notado los síntomas primeros de la enfermedad contagiosa, deberán proceder al aislamiento del animal enfermo, separándolo de los sanos en cuanto sea posible.

Art. 6º — La misma declaración y aislamiento son obligatorios respecto de los animales muertos o que se supongan muertos de enfermedades contagiosas, debiendo sus despojos ser enterrados o destruidos en la forma que el Poder Ejecutivo determine en sus reglamentos.

Art. 7º — En el momento en que la autoridad local reciba la denuncia del caso o tenga conocimiento de la existencia de la enfermedad, procederá a asegurarse del cumplimiento de las medidas prescriptas en los artículos 5º y 6º proveyendo lo necesario a su ejecución, si no hubiesen sido cumplidas, y disponiendo, cuando sea posible, la visita y examen de los animales enfermos, y de los muertos en su caso, por el perito de que pueda disponer, para verificar la naturaleza de la enfermedad.

Art. 8º — El hecho será además puesto por la misma autoridad en conocimiento del Poder Ejecutivo, en la forma y por el conducto que los reglamentos determinen.

Art. 9º — Si de las informaciones que el Poder Ejecutivo adquiriera resultara que la enfermedad es de las comprendidas en los reglamentos de que habla el artículo 3º y que el caso cae bajo algunos de los incisos del artículo 1º, el Poder Ejecutivo podrá declarar infestada la propiedad, la circunscripción o la Provincia entera, según la gravedad de las circunstancias, y estará autorizado para aislar, secuestrar y prohibir el tránsito de los animales de las zonas infestadas para desinfectar y aun destruir los animales y las cosas que pueden ser vehículos de contagio y para adoptar las medidas que en cada caso aconsejen la naturaleza y caracteres de la epizootia.

Art. 10- — Queda prohibida la introducción a la Capital Federal y Territorios Nacionales y en general, el tráfico de una Provincia a otra y al extranjero, de toda clase de productos de la ganadería elaborados con materias procedentes de animales que, según los reglamentos del Poder Ejecutivo no puedan ser aprovechados.

El Poder Ejecutivo establecerá la inspección de los saladeros y establecimientos donde se elaboren productos de aquel género destinados al consumo interprovincial, internacional y de los territorios de jurisdicción federal.

Art. II"— Todo empresario de transporte por agua o por tierra en los casos regidos por esta ley. deberá ajustarse en cuanto a las condiciones de comodidad, seguridad e higiene que deben ofrecer sus vehículos para la carga de animales, a los reglamentos sanitarios que el Poder Ejecutivo dicte.

El Poder Ejecutivo determinará asimismo las condiciones en que las empresas deben desinfectar los embarcaderos, corrales, bretes y demás locales que hayan ocupado los animales, así como los en que deben serlo las personas y objetos que hayan estado en contacto con ellos.

#### De la importación

Art. 12" — Queda prohibida la importación, por cualquier punto de la frontera marítima, fluvial o terrestre de la República, de animales atacados de enfermedades contagiosas o sospechosos de estarlo, así como la de sus despojos y la de cualquier otro objeto que haya estado en contacto con ellos o con otros objetos susceptibles de transmitir el contagio.

Art. 13" — Todos los animales procedentes de ultramar serán sometidos a una observación cuarentenaria por el término que establezca el Poder Ejecutivo, al reglamentar esta ley. El tiempo fijado por los reglamentos no podrá ser alterado sino con avisos previos de tres meses de anticipación. Si resultase algún animal atacado de enfermedad contagiosa, podrá ordenarse, según las circunstancias, que sea inmediatamente sacrificado, sin que ello autorice la exigencia de indemnización alguna. La manutención de los animales durante el tiempo de la cuarentena será costeadada por los propietarios.

Art. 14" — Si en algún buque en viaje para esta República hubiese ocurrido algún caso de enfermedad contagiosa, con muerte o sin ella, de los animales atacados, podrá ser rechazada la totalidad de los animales que traiga, y el buque no podrá atracar a ninguna costa argentina sin haber sido antes desinfectado a satisfacción de las autoridades sanitarias.

Art. 15"— Si el Poder Ejecutivo tuviese noticias de los casos ocurridos antes de la llegada del buque a aguas argentinas, podrá evitar que penetre en ellas, no permitiéndole el menor contacto directo o indirecto.

Art. 16" — El Poder Ejecutivo prohibirá por tiempo determinado la importación de animales de cualquier país donde exista alguna de las enfermedades comprendidas en los reglamentos de que habla el artículo 3º.

Art. 17—Cuando en algunos de los países limítrofes hubiese estallado alguna de las enfermedades a que se refiere el artículo anterior, el Poder Ejecutivo procederá a colocar a ese país, a los efectos de la importación, en las mismas condiciones en que se encuentran los países de ultramar.

Art. 18º — Deberá hacerlo también cuando estallada una epizootia en algún país ultramarino, el limítrofe no haya tomado a su respecto las medidas precaucionales que el Poder Ejecutivo juzgue necesarias o haya peligro de que por él sean importadas esas enfermedades.

#### De la exportación

Art. 19" — Queda prohibida la exportación de animales atacados de enfermedades contagiosas o sospechosos de estarlo.

Art. 20- — Todo animal que se intente exportar podrá ser retenido en observación, aislado, desinfectado o rechazado por el Poder Ejecutivo, siempre que los inspectores sanitarios lo reputen sospechoso, sin que haya lugar a indemnización alguna.

Art. 21" — Ningún buque podrá cargar animales sin ajustarse, en cuanto a sus condiciones higiénicas, a los reglamentos correspondientes.

El Poder Ejecutivo queda autorizado a suspender el permiso de cargar animales durante un tiempo que durará de seis meses a dos años, según el caso, a todo buque que durante la travesía última no hubiese dado cumplimiento a las disposiciones de esos reglamentos.

Art. 12<sup>b</sup> — El capitán y agente de todo buque cargado con animales en puertos argentinos, que durante la travesía tuviese casos de enfermedades contagiosas, deberá comunicarlo al Gobierno argentino desde el primer puerto a que el buque llegase, después de ocurrida la enfermedad, y el Poder Ejecutivo dará aviso correspondiente a las autoridades del puerto de destino. La no observancia de esta disposición autorizará al Poder Ejecutivo a aumentar hasta cinco años el entredicho establecido en el artículo anterior, o aplicarlo a otros buques de la misma empresa cargadora, y aún a todos ellos, según la gravedad de la falta.

Art. 23" — En el caso de haberse producido en el país alguna de las enfermedades enumeradas en los reglamentos de que habla el artículo 3<sup>o</sup>, el Poder Ejecutivo podrá suspender la exportación de animales de las especies atacadas procedentes de la región declarada infectada y mandar desinfectar todo animal u objeto del mismo origen que se destine a la exportación.

La suspensión se mantendrá hasta que hayan pasado, después del último caso, los días necesarios para que desaparezcan, a juicio del Poder Ejecutivo, los gérmenes de la infección.

#### Indemnizaciones

Art. 24" — Los propietarios de animales, objetos y construcciones que el Poder Ejecutivo hubiese mandado destruir en virtud de la autorización que esta ley le confiere, tendrán derecho a exigir una indemnización en dinero igual al valor de los animales, objetos o construcciones, en el momento en que la medida hubiese sido ejecutada. Si alguna parte del animal, objeto o construcción pudiera aprovecharse, el valor de esa parte será descontado. Si la enfermedad de que estaba atacado el animal destruido fuese necesariamente mortal, no habrá lugar a indemnización.

Art. 25° — El valor de los animales, objetos o construcciones destruidos por resolución del Poder Ejecutivo, será estimado por el Ministro de Agricultura o los comisionados especiales que el Poder Ejecutivo designe, y el propietario o sus representante, debiendo los Tribunales Federales y los de los Territorios resolver sumariamente las disidencias que pudieran ocurrir al hacerse el justiprecio.

Art. 26—El derecho de los propietarios a pedir la indemnización se prescribe a los tres meses de la destrucción ordenada.

Art. 27° — Los animales importados, cuya destrucción se hubiese ordenado, no serán indemnizados, si no hubieran transcurrido tres meses, cuando menos, después de su salida del lazareto cuarentenario.

Art. 28° — Los propietarios que no hubiesen cumplido alguna de las prescripciones de esta ley o de los reglamentos sanitarios emanados del Poder Ejecutivo, perderán todo derecho a ser indemnizados por las causales enumeradas en los artículos precedentes.

#### Penalidades

Art. 29<sup>9</sup> — Toda infracción a las disposiciones contenidas en los artículos 4°, 5° y 6° y en los reglamentos del Poder Ejecutivo, en cuanto a esos artículos se refieran, será castigada con multa de cien a quinientos pesos o arresto de treinta a sesenta días, según la importancia de la infracción.

Art. 30<sup>9</sup> — Serán castigados con arresto de dos a seis meses o multa de doscientos a mil pesos:

- 1<sup>9</sup> Los propietarios o encargados y los funcionarios o particulares, que desobedeciendo órdenes de las autoridades competentes, hubiesen dejado comunicar animales enfermos con sanos.
- 2<sup>9</sup> Los que aún antes de la clausura de puertos para el país de origen hubiesen, a sabiendas, introducido a la República animales afectados de enfermedades contagiosas o que hubiesen estado expuestos al contagio.
- 3<sup>9</sup> Los empresarios de transporte que conduzcan animales en pie, con infracción de los reglamentos a que se refiere el artículo 11, debiendo duplicarse la pena cuando, por la omisión de las medidas de desinfección e higiene reglamentarias, se hubiese comunicado una enfermedad contagiosa a otros animales.

Art. 31<sup>9</sup> — Todo animal que hubiese sido introducido con violación de las cuarentenas establecidas por los reglamentos caerá en co-

miso, y su propietario o introductor incurrirá además en una multa de doscientos a mil pesos.

Art. 32" — Las penas impuestas en los artículos anteriores serán duplicadas en cada caso de reincidencia en la misma violación, sin perjuicio de hacerse efectivas las resoluciones del Poder Ejecutivo, a expensas del obligado, si no las cumpliese el mismo.

Art. 33" — Las penas impuestas en los artículos anteriores, serán aplicadas por los jueces federales o de territorio federal en juicio sumario, a pedido de las autoridades sanitarias, que serán parte en él.

Las resoluciones que pronuncien «erán apelables en relación.

#### Lazaretos cuarentenarios de animales

Art. 34<sup>p</sup> — El Poder Ejecutivo procederá a levantar un lazareto cuarentenario y un laboratorio bacteriológico en los terrenos de propiedad nacional existentes en el puerto de la Capital.

En los demás puertos y parajes habilitados de la frontera terrestre, el Poder Ejecutivo queda autorizado para constituir los veterinarios y el servicio sanitario que juzgue convenientes para asegurar la ejecución de las disposiciones de esta ley y de los reglamentos que en virtud de ella se dicten.

Art. 35" — El costo total de las construcciones a que se refiere el artículo anterior no podrá exceder de 300.000 pesos, y el Poder Ejecutivo queda autorizado para ejecutarlos imputando los gastos que demanden a la presente ley. debiendo ellos costearse con el producido de las letras por venta de tierras públicas, depositadas en la tesorería de la Oficina de Tierras.

Art. 36" — Queda autorizado el Poder Ejecutivo para contratar, dentro o fuera del país, el personal técnico que tendrá a su cargo la dirección del lazareto y laboratorio.

Art. 37" — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,  
en Buenos Aires, a 5 de octubre de 1900.

\* \* \*



## II

DE LA LEY N° 15021

(15-XI-1959)

PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION

NACIONAL PARA 1959/1960

## PENALIDADES POR INFRACCIONES

Art. 39“ — Modifícanse las disposiciones que a continuación se mencionan, cuyos textos quedan redactados en la forma siguiente:

LEY 12566 <sup>1</sup> — Artículo 12: “Los infractores a la presente ley y a los decretos y reglamentos que en su consecuencia se dicten, serán pasibles de multas de mil (\$ 1.000) a quinientos mil pesos moneda nacional ( \$ 500.000), *conmutables* por prisión a razón de un (1) día por cada mil pesos moneda nacional (\$ 1.000) de multa”.

DECRETO 5153/45 - (ratificado por ley 12979 — Artículo 23: “Las infracciones al presente decreto y a los reglamentos que en su consecuencia se dicten, serán pasibles de multas que aplicará la Secretaría de Agricultura y Ganadería, graduables dentro de un mínimo de mil pesos moneda nacional (\$ 1.000) y un máximo de cien mil pesos moneda nacional (\$ 100.000)”.

LEY 13636 <sup>1</sup> — Artículo 8<sup>2</sup>: “Las infracciones a la presente ley o sus reglamentos serán reprimidas con multas de mil (\$ 1.000) a diez mil pesos moneda nacional (pesos 10.000). sin perjuicio del

<sup>1</sup> Lucha obligatoria contra las garrapatas.

<sup>2</sup> Lucha contra la fiebre aftosa.

<sup>3</sup> Productos medicamentosos para los animales.

comiso de los productos. En caso de reincidencia, los límites mínimo y máximo de la multa serán de cinco mil pesos moneda nacional (\$ 5.000) a cincuenta mil pesos moneda nacional (\$ 50.000), pudiendo disponerse con carácter de penalidad accesoria la cancelación de la autorización, permiso o habilitación del establecimiento y la clausura del mismo”.

DECRETO 7383/44 <sup>4</sup> (ratificado por ley 12979 y modificado por ley 14305)—Artículo 7<sup>9</sup>: “Los infractores a las presentes disposiciones, o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, se harán pasibles de multas que aplicará la Secretaría de Agricultura v Ganadería, graduables dentro de un mínimo de mil pesos moneda nacional (\$ 1.000) y un máximo de cien mil pesos moneda nacional (\$ 100.000)”.

\* \* \*

□ ' Extirpación obligatoria de la sama ovina y caprina.

## DE LA LEY N° 15945

19-X-1961

## MODIFICACION DE LA LEY N° 3959

## PENALIDADES POR INFRACCIONES

Artículo 1º— Modifícanse los artículos 29, 30 y 31 de la ley N° 3959, de policía sanitaria de los animales, en la siguiente forma:

“Art. 29. — Toda otra infracción a las disposiciones contenidas en los artículos 4º, 5º y 6º y en los reglamentos del Poder Ejecutivo, en cuanto a esos artículos se refieran, será castigada con multa de \$ 1.000 (mil pesos) a \$ 500.000 (quinientos mil pesos), conmutables por prisión a razón de 1 (un) día por cada \$ 1.000 (mil pesos) de multa, según la importancia de la infracción.

“Toda infracción a las disposiciones de esta ley será castigada, si no tuviera una pena especialmente establecida, con multa de \$ 1.000 (mil pesos) a \$ 500.000 (quinientos mil pesos), conmutables por prisión a razón de 1 (un) día por \$ 1.000 (mil pesos) de multa, según la importancia de la infracción.

“Art. 30. — Serán castigados con multas de \$ 1.000 (mil pesos) a \$ 500.000 (quinientos mil pesos), conmutables por prisión a razón de 1 (un) día por cada \$ 1.000 (mil pesos) de multa:

- 1º) Los propietarios o encargados y los funcionarios y particulares que desobedeciendo órdenes de las autoridades competentes hubiesen dejado comunicar animales enfermos con sanos.
- 2º) Los que aún antes de la clausura de puertos para el país de origen hubiesen, a sabiendas, introducido en la República

animales afectados de enfermedades contagiosas o que hubiesen estado expuestos al contagio.

- 3<sup>9</sup>) Los empresarios de transportes que conduzcan animales en pie con infracción de los reglamentos a que se refiere el artículo 11, debiendo duplicarse la pena cuando por la omisión de las medidas de desinfección o higiene reglamentarias, se hubiese comunicado una enfermedad contagiosa a otros animales.

“Art. 31. — Todo animal que hubiese sido introducido con violación de las cuarentenas establecidas por los reglamentos, caerá en comiso y su propietario o introductor incurrirá, además, en una multa de \$ 1.000 (mil pesos) a \$ 500.000 (quinientos mil pesos).”

Art. 2? — De forma.



De acuerdo con lo que antecede no ha sido modificado y continúa en vigor el *artículo* 32 de la ley N<sup>o</sup> 3959. sobre duplicación de las penas, cuyo texto es el siguiente:

Art. 32. — Las penas impuestas en los artículos anteriores serán duplicadas en caso de reincidencia en la misma violación, sin perjuicio de hacerse efectivas las resoluciones del Poder Ejecutivo a expensas del obligado, si no las cumpliere el mismo.

\* \* \*

## DEL DECRETO-LEY N° 6134

(25 de julio de 1963)

CREACION DEL SERVICIO DE LUCHAS SANITARIAS  
EN LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD ANIMAL

## PENALIDADES POR INFRACCION

Artículo 1º— Créase en la Dirección General de Sanidad Animal de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, el Servicio de Luchas Sanitarias, el que tendrá por función programar y realizar las tareas necesarias par prevenir, controlar y erradicar las enfermedades de los animales, como así también el control de productos veterinarios, aplicando los regímenes establecidos en la parte pertinente de la ley 3959 (1899-1919. 494), y en las leyes 12566 (1920-1940. 899) y 13636 (IX-A, 336), decretos 7383 del 28 de marzo de 1944 (IV, 186) y 5153 del 5 de marzo de 1945 (V, 99), ratificados por la ley N° 12979 (VII, 259) y decreto-ley 10834/57 (XVII-A, 711).

Art. 19. — Las sanciones establecidas en las leyes 3959 en lo que se refiere al art. 1º del presente decreto (modificada por la ley 15945), (XXI-A, 2110), 12566 y 13636 (ambas modificadas por la ley 15021 (XIX-A, 1º, 188), decretos 7383 del 28 de marzo de 1944 (ratificado por la ley 12979 y modificado por las leyes 14305 (XIV-A, 15) y 15021, y 5153 del 5 de marzo de 1945 (ratificado por la ley 12979 y modificado por la ley 15021 y decreto-ley 10834/57, serán aplicadas por la Comisión de Administración de Programas Sanitarios, por resolución tomada por no menos de 3 de sus miembros.

En los demás supuestos de la ley 3959 las sanciones serán aplicadas por la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

Art. 20.—Fijase en m\$n. 1.000 y m\$n 1.000.000, el mínimo y máximo de las multas aplicables por infracción a las disposiciones legales aludidas en el artículo anterior.

Impuesta la multa, previo pago de la misma podrá apelarse dentro de los 10 días ante el Juez nacional.

Art. 24. — Deróganse todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Art. 26. — Comuníquese, etc.

GUIDO

Martínez de Hoz - Villegas - Astigueta - López Saubidet - Tiscornia

## III

## LEY N° 17160

## NUEVA REFORMA DEL ART. 10\* DE LA LEY N° 3959

Modifícanse las normas de habilitación de establecimientos que reciben, producen o elaboran productos de origen animal, y a la fiscalización higiénico-sanitaria de carnes, aves, huevos y pescados. Multas graduables por infracciones.

\* \* \*

Buenos Aires, 2 de febrero de 1967.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del Estatuto de la Revolución Argentina.

El Presidente de la Nación Argentina, Sanciona y Promulga con Fuerza de ley:

Artículo *V* — Sustitúyese el artículo 10 de la Ley 3959 de Policía Sanitaria Animal, modificada por decreto ley 2872/58, en la siguiente forma:

Art. 10<sup>º</sup> — El Poder Ejecutivo reglamentará por intermedio de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería todo lo relacionado con la habilitación, fiscalización sanitaria integral e inspección de los mercados de ganado, tabladitas, ferias, mataderos, de aves, industrialización de la caza y de la pesca, y, en general de todos los establecimientos donde se elaboren o depositen productos de origen animal, cuando los lugares donde se efectúen las ventas o el sacrificio

de animales o donde estén ubicados los establecimientos en que se fabrican, depositan o del que se extraen productos, correspondan a la jurisdicción federal, o si están situados en una provincia, los animales o los productos proceden de otra nación, de otra provincia, o de otro territorio o se destinen al comercio internacional, interprovincial o al de una provincia con territorio de jurisdicción federal o viceversa. Los productos mencionados precedentemente transitarán con la correspondiente documentación sanitaria. Los productos de origen animal no comestibles procedentes de establecimientos no habilitados en el orden nacional, podrán transitar por el territorio de la República Argentina con destino a un establecimiento habilitado previo cumplimiento de los requisitos que establezca la reglamentación.

“El Poder Ejecutivo requerirá de los Gobiernos de Provincia que adecúen sus actuales normas, a las exigencias de la presente ley y su reglamentación y formalizará con las provincias, municipios y demás autoridades provinciales, los acuerdos y convenios que considere necesarios para el logro de los fines enunciados”.

Art. 2º — Toda violación a las normas del artículo 10 de la Ley 3959 y a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten serán penadas por la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería con multas graduables desde diez mil pesos moneda nacional (\$ 10.000,—) hasta diez millones de pesos moneda nacional (\$ 10.000.000.—) pudiendo disponerse la suspensión o retiro de la habilitación conferida.

Impuesta la multa, previo pago de la misma, podrá apelarse dentro de los diez (10) días ante el Juez Nacional.

Art. 3 º— Dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente Ley, la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería elevará a consideración del Poder Ejecutivo, el Decreto, Reglamentario de la misma.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro oficial y archívese.

ONGANIA

ANTONIO R. LANUSSE



Los fundamentos de la Ley N° 17.160 fueron dados en su momento, con las firmas de Antonio R. Lanusse y Lorenzo A. Raggio, en el mensaje dirigido al Excmo. Señor Presidente de la Nación, expresando por de pronto que el mencionado artículo 10 de la Ley N° 3959 ya había sido modificado por el Decreto Ley N° 2872/58. He aquí el texto de dichos fundamentos. \*

“La modificación que se propicia surge del estudio realizado por la repartición técnica de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, referente a las normas de habilitación de los establecimientos que reciben, producen o elaboran productos de origen animal y a la fiscalización higiénico-sanitaria de las carnes, derivados y subproductos, como así también aves, huevos y pescados que lleva a la conclusión de que es necesario redactar, recopilando en un solo documento, permanentemente actualizado, todas las leyes, reglamentos y disposiciones que en la actualidad normatizan sobre dichos aspectos.

“Es evidente la necesidad de dichas modificaciones por cuanto organismos internacionales, de los que nuestro país es miembro, hacen periódicas recomendaciones para la aplicación de normas higiénico-sanitarias, con sus implicancias socio-económicas, cuya falta de prontitud en su adopción y unidad de criterio en su aplicación, producen irreparables daños, tanto al Estado como al sector de la actividad privada.

“Es por ello que se considera necesario encomendar a un organismo técnico especializado la realización de esa labor, facultándolo al mismo tiempo, para convenir acuerdos con provincias, departamentos y municipios, con el fin de coordinar la tarea futura en todo el ámbito de la Nación.

“La elevación de los montos imponible a los infractores de las disposiciones de la Ley N° 3959, y sus reglamentaciones que se propician, tienen por fin proteger nuestra producción pecuaria y de manera especial a las industrias cárneas que han acreditado ante los países tradicionalmente compradores a través de largos años de trabajo honesto y correcto' la calidad, y sanidad de nuestras exportaciones y que en ese sentido les han impartido los servicios técnicos.

\* Del Boletín Oficial de la República Argentina, No. 21.128, 15 de febrero de 1967.

“Son los hechos que en determinado momento provocaron exportadores inescrupulosos al efectuar envíos que determinaban rechazos de los Servicios Técnicos extranjeros y que se hallaban cubiertos por seguros tomados contra todo riesgo. Estas maniobras facilitaron la pérdida del comercio de carnes curadas y en otros casos, trajeron como consecuencia serios reclamos en el orden internacional con grave detrimento del concepto formado en el exterior.

“Procede señalar que las modificaciones que se propician, han sido sometidas a la discusión de las cámaras que agrupan las distintas especializaciones que hacen las carnes, subproductos y derivados, cuyos componentes manifestaron su beneplácito y apoyo a la labor desarrollada”.

## IV

## C A R N E S

Régimen de habilitación y funcionamiento para establecimientos afectados a faena, comercialización y depósito \*

## MENSAJE Y LEY N° 18811

Buenos Aires, octubre 13 de 1970.

Excelentísimo Señor Presidente de la Nación:

El proyecto de Ley que acompaña el presente mensaje tiende a la aplicación integral de normas comunes para todo el país en lo concerniente al régimen de habilitación y funcionamiento de los establecimientos donde se faenen animales y se elaboren o depositen productos de origen animal, a fin de mejorar y cimentar en los aspectos higiénicos sanitarios la elaboración e industrialización de los productos de origen animal y los requisitos relativos a una adecuada construcción e ingeniería sanitaria de los establecimientos.

Con ello no sólo se beneficiará la producción pecuaria, sino que también se logrará la aspiración de establecer normas básicas homogéneas, que consideren con criterio nacional las características higiénico-sanitarias. y además se contribuirá positivamente a prestigiar la calidad de nuestras carnes en el exterior, estímulando la actividad de una industria jerarquizada y de un comercio internacional en firme desarrollo, atendiendo a las exigencias de los mercados compradores.

\* Boletín Oficial de la República Argentina. No. 22.045, 2 de noviembre de 1970.

La vigencia de la Ley 3959 modificada por la 17.160, B. O. 15/2/67. ha permitido la aplicación de normas uniformes higiénico-sanitarias en todos los establecimientos donde se elaboren o depositen productos de origen animal, cuando los lugares donde se efectúen las ventas o el sacrificio de animales o donde estén ubicados los establecimientos en que se fabrican, depositan o de que se extraen productos, correspondan a la jurisdicción federal, o si están situados en una provincia, los animales o los productos proceden de otra nación, de otra provincia o de otro territorio o se destinan al comercio internacional, interprovincial o al de una provincia con territorios de jurisdicción federal o viceversa, pero han quedado al margen de ese contralor, por razones de jurisdicción, los demás establecimientos y consecuentemente sus productos destinados al consumo interno, tanto en las provincias como en la Capital Federal, cuya fiscalización la ejerce la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto acompañado tiene el evidente propósito de corregir esa falta y para ello encomienda al Poder Ejecutivo una reglamentación uniforme para todo el país en cuanto se refiere a normas higiénico-sanitarias para la construcción de los establecimientos y para la elaboración, industrialización y transporte de carnes, productos, subproductos y derivados de origen animal destinados al consumo interno.

Se reserva para los Gobiernos de Provincia y para la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el contralor del cumplimiento de aquellas disposiciones en sus respectivas jurisdicciones y por intermedio de sus propios organismos de aplicación y se las autoriza a dictar las normas complementarias que requiere el mejor cumplimiento de la Ley. Para obtener la aplicación integral del sistema se faculta a la autoridad sanitaria nacional para concurrir en cualquier parte del país a los fines indicados.

La República Argentina como país exportador de carnes debe mantener actualizada su reglamentación atendiendo a las exigencias de los mercados compradores y contemplar fundamentalmente el contralor de las funciones sanitarias, para velar también por los principios básicos de la higiene de los productos, subproductos y derivados de origen animal que consume nuestra población. Esta función altamente social en bien de la comunidad ejerce la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, a ese nivel, a través de sus organismos especializados.

En otros países, como Alemania Federal y los Estados Unidos de América, se han dictado leyes similares a la que se propicia, resultando oportuno transcribir, con respecto a la última de ellas, sancionada el 15 de diciembre de 1967. Ley Federal de Inspección de Carnes, los siguientes conceptos allí expresados:

“La carne y productos alimenticios de la carne son una importante fuente del suministro total de alimento de la Nación. Se consumen en toda la Nación y la mayor parte de ésta se traslada en comercio interestatal o exterior. Es esencial en interés del público que la salud y bienestar de los consumidores sean protegidos, asegurándoles que la carne y productos alimenticios de la carne, que se les distribuye sean puros, no adulterados y adecuadamente marcados, etiquetados y empaquetados. Carne o productos alimenticios de carne, impura, adulterados o etiquetados falsa o erróneamente menoscaban la reglamentación efectiva de carne y productos alimenticios de carne en comercio interestatal o exterior, son perjudiciales al bienestar público destruyen mercados para carnes y productos alimenticios de carne puros, no adulterados y adecuadamente etiquetados y empaquetados y resultan en diversas pérdidas para los productores y elaboradores de carne y productos alimenticios de carne, como también en perjuicio de los consumidores. Los artículos impuros adulterados, etiquetados erróneamente o empaquetados engañosamente pueden venderse a precios menores y competir deslealmente con los artículos puros no adulterados, y correctamente etiquetados y empaquetados, en desmedro de los consumidores y el público en general”.

Un régimen similar al de la presente ley es el establecido en el Código Alimentario Argentino. Ley 18.284 del 18 de julio de 1969. vigente en todo el territorio del país y cuya aplicación se encuentra a cargo de los organismos provinciales correspondientes y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

En razón pues, de todo lo expuesto, es que se eleva el adjunto proyecto de Ley, con el cual se estima obtener resultados altamente positivos en beneficio de la sanidad y comercio de nuestras carnes.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

CARLOS M. J. MOYANO LLERENA - EDUARDO F. McLoughlin  
WALTER F. KUGLER.

\* \* \*

## LEY N° 18811

Buenos Aires, 13 de octubre de 1970.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto de la Revolución Argentina.

El Presidente de la Nación Argentina.

Sanciona y Promulga, con Fuerza de Ley:

Artículo 1º — Facúltase al Poder Ejecutivo a reglamentar en todo el territorio del país, el régimen de habilitación y funcionamiento de los establecimientos donde íe faenen animales, se elaboren o depositen productos de origen animal en lo concerniente a los requisitos de construcción e ingeniería sanitaria y en los aspectos higiénico-sanitarios de elaboración, industrialización y transporte de las carnes, productos, subproductos y derivados de origen animal destinados al consumo dentro de la misma provincia o de la Capital Federal, los que deberán transitar con la correspondiente documentación sanitaria.

Art. 2º — Los Gobiernos de Provincia y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires ejercerán el contralor del cumplimiento de dichas disposiciones en sus respectivas jurisdicciones por intermedio de los organismos de aplicación que los mismos determinen, pudiendo dictar las normas complementarias que requiera el mejor cumplimiento de la presente Ley. Sin perjuicio de ello la autoridad sanitaria nacional podrá concurrir para hacer cumplir dichas normas en cualquier parte del país.

Art. 3º — Toda infracción a las normas de la presente Ley y a las reglamentaciones serán sancionadas con multas graduables desde cien pesos (\$ 100,—) hasta cien mil pesos (\$ 100.000,—). pudiendo disponerse la suspensión o retiro de la habilitación conferida.

Las sanciones serán impuestas por la autoridad sanitaria de aplicación, previo sumario que garantice el derecho de defensa y conforme al procedimiento de cada jurisdicción. Las resoluciones que impongan multa serán apelables, previo pago de la misma, dentro

de los diez (10) días de notificadas, ante el Tribunal . competente según la jurisdicción en que se hayan dictado.

Art. 4<sup>v</sup> — Comuníquese, publíquese. dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

LEVINGSTON.

CARLOS M. T. MOYANO LLERENA.

EDUARDO F. MCLOUGHLIN.

\* \* \*

## CARNES Y DERIVADOS \*

Reglamento de Inspección de Productos y Subproductos y Derivados:

Buenos Aires, 13 de octubre de 1970.

Visto y considerando las disposiciones de la Ley N<sup>o</sup> 18811.

El Presidente de la Nación Argentina.

Decreta:

Artículo 1<sup>o</sup> — A los efectos establecidos en el artículo 1<sup>o</sup> de la ley N<sup>o</sup> 18.811, declárase de aplicación en los establecimientos ubicados en jurisdicción de las provincias o Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos productos, subproductos y derivados de origen animal se destinen a consumo local, el Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, aprobado por Decreto N<sup>o</sup> 4.238 de fecha 19 de julio de 1968.

Art. 2<sup>o</sup> — Los establecimientos y medios de transporte ya habilitados en el orden provincial o municipal serán considerados como habilitados provisionalmente.

La adecuación de los mismos a las disposiciones del Reglamento citado en el artículo anterior se llevará a cabo en los plazos que acuer-

\* Boletín Oficial de la República Argentina, No. 22.048 de 1970.

5 de noviembre

de para cada caso en particular el correspondiente organismo de aplicación y dentro del término máximo de tres (3) años.

Art. 3<sup>º</sup> — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y vuelva a la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería a sus efectos.

LEVINGSTON.

WALTER F. KUGLER - CARLOS M. J. MOYANO LLERENA.



C A R N E S  
MENSAJE Y LEY N° 18819

PROCEDIMIENTOS PARA EL SACRIFICIO DE ANIMALES \*

Buenos Aires, 14 de octubre de 1970.

Excelentísimo  
Señor Presidente de la Nación:

Tengo el honor de dirigirme al Primer Magistrado a fin de elevar a su consideración el proyecto de Ley adjunto por el cual se derogan las disposiciones de las Leyes números 16.888 y 18.050, referentes a los procedimientos de insensibilización en el sacrificio de los animales que se efectúan en los mataderos o frigoríficos del país.

El citado proyecto, amplía las disposiciones legales precitadas incluyendo la especie ovina y prevé la aplicación del régimen de insensibilización a las aves, conejos y otras especies menores.

Asimismo designa los órganos jurisdiccionales que intervendrán en la aplicación de las sanciones que se establecen.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

CARLOS M. J. MOYANO LLERENA

WALTER F. KUGLER

\* Boletín Oficial de la República Argentina, No. 22.045, 2 de noviembre de 1970.

## LEY N° 18819

Buenos Aires, 14 de octubre de 1970.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del Estatuto de la Revolución Argentina.

El Presidente de la Nación Argentina  
Sanciona y Promulga con Fuerza de Ley.

Artículo 1° — El sacrificio de los animales de las especies bovina, equina, ovina, porcina y caprina, que se faenen en los mataderos o frigoríficos del país deberá ajustarse a los requisitos y procedimientos de insensibilización que establezca el Poder Ejecutivo. Queda prohibido el uso de la maza.

Art. 2° — El Poder Ejecutivo podrá extender el régimen establecido por el artículo V. al sacrificio de las aves, conejos y otras especies menores.

Art. 3° — La Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería teniendo en cuenta los ritos religiosos existentes en el país podrá autorizar procedimientos especiales siempre que no desvirtúen el fundamento de la presente ley.

Art. 4° — Los servicios de inspección veterinaria de la administración pública nacional y de las administraciones provinciales y municipales, efectuarán el contralor del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.

Art. 5° — La presente ley empezará a regir a los ciento ochenta (180) días del dictado de su decreto reglamentario.

Art. 6° — Quienes infrinjan las disposiciones de esta ley o de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten se harán pasibles de multa graduable desde diez pesos (\$ 10,—) hasta un mil pesos (\$ 1.000,—), pudiendo disponerse la suspensión de actividades; las sanciones podrán apelarse dentro del plazo de diez (10) días de notificados.

Las multas deberán ser abonadas previamente.

Alt. 7<sup>9</sup> — Las sanciones serán impuestas por la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería en los establecimientos sujetos a la inspección veterinaria nacional y podrán apelarse ante dicha Secretaría de Estado, la que una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la parte final del artículo 6<sup>1</sup> concederá el recurso para ante el Juzgado Nacional en lo Federal, en lo Criminal y Correccional —en la ciudad de Buenos Aires— y para ante el Juzgado en lo Federal correspondiente en el resto del territorio de la República. La Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería deberá expedirse en el plazo de diez (10) días sobre el recurso de apelación interpuesto. Concedido el mismo, remitirá de inmediato las actuaciones al Tribunal de Apelación.

Art. 8° — Las provincias determinarán el organismo que aplicará las sanciones establecidas en esta ley y el Tribunal de Apelación que actuará en el ámbito provincial.

Art. 9—Deróganse las leyes números 16888 y 18050.

Art. — 10" — Comuníquese, publíquese. dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

LEVINGSTON.

CARLOS M. J. MOYANO LLERENA.

\* \* \*

## DECRETO N° 1733

Buenos Aires. 14 de octubre de 1970.

Visto y considerando la ley N° 18.819. referente a la matanza eutanásica de las especies bovina, equina, ovina, porcina y caprina, que se faenen en los mataderos o frigoríficos del país.

Por ello, atento lo dispuesto en el artículo 1° de la citada ley N° 18.819, lo dictaminado a fojas 29 de la actuación N° 4.231/65 y lo propuesto por el señor Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería.

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA  
DECRETA:

Artículo 1º — La insensibilización de las especies a que se refiere el artículo 1- de la ley 18.819. se obtendrá mediante el empleo de la pistola con proyectil cautivo o pistolete, el martillo neumático, el choque eléctrico o el bióxido de carbono.

Queda prohibido el uso de instrumentos que penetren en la caja craneana, destruyan la masa encefálica o contaminen los tejidos del sistema nervioso central.

Todos los aparatos deberán ser previamente aprobados por el Servicio de Sanidad Animal.

Art. 2º — La insensibilización, que se hará en bretes, cajones o recintos individuales, y el sacrificio de los animales, no deben ser efectuados a la vista del resto del ganado. La sangre no podrá llegar al lugar en que se halla confinado este último. Las instalaciones deberán evitar que el estampido de los proyectiles y otro ruido similar llegue a los animales que se sacrificarán a continuación.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese. dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y vuelva a la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, a sus efectos.

LEVINGSTON.

CARLOS M. J. MOYANO LLERENA.

WALTER F. KUGLER.